

**Dictamen N° E39755, de 2020, Contraloría General de la República**

<b>Número del Dictamen</b>	E39755N20
<b>Organismo</b>	Contraloría General de la República
<b>Fecha de promulgación</b>	30 de septiembre de 2020
<b>Dictámenes Relacionados</b>	9913/2020, 6854/2020, 8507/2020
<b>Materia</b>	Procede el pago de los servicios de jardín infantil prestados de manera remota durante la pandemia del COVID-19.
<b>Antecedentes</b>	<p>La Dirección del Trabajo solicita que se complemente el dictamen N° 9.913, de 2020, de este origen, pues a su entender, este no comprendería el caso de los jardines infantiles que durante la actual pandemia del COVID-19 se acogieron solo parcialmente a la Ley N° 21.227, Ley sobre Protección al Empleo, y que actualmente continúan otorgando los servicios en una modalidad distinta a la pactada, esto es, de una manera remota, por lo que consulta si, en tales circunstancias, resultaría procedente efectuar el pago de la prestación correspondiente.</p> <p>En ese orden de ideas, requiere, además, que se esclarezca el criterio contenido en el dictamen N° 6.854, de 2020, en cuanto a la exigencia de que los proveedores mantengan vigentes los contratos de "los trabajadores adscritos al respectivo acuerdo de voluntades", y si tal circunstancia podría entenderse referida a aquellos empleados que permiten la continuidad de los servicios en las nuevas modalidades que han sido implementadas, en atención a la pandemia que afecta al país, tales como las realizadas por vías no presenciales.</p> <p>Por su parte, también ha formulado una presentación en tal sentido <i>doña Carmen Jiménez García</i>, funcionaria de la Superintendencia de Educación, quien expresa que, en su caso, el jardín infantil al que asiste su hijo de cuatro años ha continuado otorgando apoyo pedagógico a distancia, a través de clases por videoconferencias, lo que ha contribuido al desarrollo educativo del menor. Añade que al disminuir drásticamente la matrícula de los menores que asistían a ese centro educacional, dicho establecimiento optó por acogerse de manera parcial a la ley N° 21.227, lo que implica que este sigue pagando parte de las remuneraciones a sus trabajadores.</p>
<b>Contenido emitido por CGR</b>	Tomando en consideración lo dispuesto en el dictamen N° 9.913 de 2020, que afirma no solamente que el beneficio de jardín infantil durante la pandemia del COVID-19 corresponde a un beneficio voluntario sujeto a disponibilidad presupuestaria, sino que también afirma que, respecto a los convenios que se mantienen vigentes, es posible mantener el pago acordado en la medida que, entre otros requisitos, el proveedor mantenga los contratos de sus trabajadores y que se les continúe pagando sus remuneraciones y obligaciones de seguridad laboral y social, como establece el dictamen N° 6.854 de 2020, Contraloría



	<p>establece la improcedencia del pago de dicho beneficio en el caso de los proveedores que se acogieron a la Ley N° 21.227, debido a que dicha ley permite que los empleadores dejen de pagar las remuneraciones de los trabajadores, lo que conduce al incumplimiento de los requisitos anteriormente señalados.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, Contraloría hace una distinción respecto a la improcedencia del pago del beneficio de Jardín Infantil, en razón de que la misma Ley N° 21.227 regula no solamente la suspensión de la relación laboral, sino que también regula la reducción temporal de jornada de trabajo, lo que implica la mantención de la relación laboral en cuestión.</p> <p>En otras palabras, no corresponde el pago del beneficio a los proveedores que no presten servicios en virtud de la Ley N° 21.227, pues constituiría el caso de enriquecimiento sin causa. Caso distinto es el de los jardines infantiles que han seguido entregando sus servicios en otras modalidades, como la virtual o remota. <b>En este último caso, sería procedente el pago respectivo</b>, adecuándose el contrato y el precio pactado a la nueva forma de prestación de servicios (hay que recordar que la autoridad contratante conserva la opción de ejercer las facultades modificatorias del contrato en consideración a las especiales circunstancias, de acuerdo con el dictamen N° 8.507, de 2020).</p>
--	--

Por João Marcos Augusto  
Ayudante de la Cátedra de Derecho Público